

INFORMACIONES

NO CAER EN LA TRAMPA

UN comentario sobre el acto terrorista de ayer debe contemplar dos partes necesariamente. La condena más rotunda e inequívoca ha de dar paso a una reflexión política, a un capítulo de conclusiones; a la vez, todo análisis político, tratando de superar una inevitable primera reacción emocional, debe ser precedido de una afirmación: el de ayer ha sido un acto execrable, que no puede pretender ninguna atenuante política. No es un delito político, es un crimen premeditado y frío, con la intención de herir a toda la sociedad, que busca alimentar una espiral de violencia, con la que unos cuántos locos piensan que van a poder encaramarse al Poder.

Hace tres días, al comentar aquí la muerte de Carlos González, solicitamos la acción más firme y decidida contra una extrema derecha a la que se atribuye el asesinato del joven madrileño. Hoy, sin necesidad de erigirnos en sala de justicia, no vemos razón para dejar de señalar los presuntos autores del crimen de San Sebastián, máxime cuando la propia E.T.A.-V Asamblea ha reivindicado su desdichada paternidad.

La conclusión es clara: la tesis común de los extremismos opuestos es exasperar la situación aprovechando la delicada fase histórica de transición hacia la democracia. Unos quieren inducir al Poder a una represión nerviosa e indiscriminada que ponga fin a la actual evolución. En esto coinciden las minorías residuales en pie de guerra, cuya única posibilidad —que es en realidad una imposibilidad, de ahí una inutilidad que agrava el crimen— es una dialéctica de violencia. Nada favorable pueden esperar los extremistas del veredicto de las urnas. Cualquier futuro Gobierno democrático, sea del signo que sea, será contrario a los violentos, porque nuestra sociedad es pacífica y los electores mostrarán su apego al orden y la paz.

Los terroristas cumplirían su objetivo si no logramos evitar que la violencia y el miedo arraiguen en la sociedad y nos arrastre. No podemos convertir a los muertos de cualquier signo en banderines de enganche. No caigamos en la trampa. Ni un crimen de la extrema derecha debe dar lugar a jornadas de lucha que tienen efectos desestabilizadores y ponen una soga al cuello de la propia oposición, ni un crimen de la extrema izquierda debe llevar a la conclusión de que el proceso político actual es inviable y hay que volver a las más altas cotas de autoritarismo.

Cada golpe de violencia nutre las filas de quienes sienten la tentación totalitaria. Vamos a insistir hasta la saciedad que no es esa la solución aceptable para un pueblo civilizado y para una clase política digna. No podemos admitir una opción que suponga renunciar a un destino pacífico y democrático. Una opción que trasladaría a la generación siguiente la tarea de buscar soluciones de convivencia. ¿El pueblo español está marcado por un trágico destino de violencia y odio? No aceptamos ese determinismo. Por el contrario, hay que tomar conciencia colectiva de que vivimos un momento crucial, una nueva oportunidad histórica de responder no a esa pregunta.

Los alemanes occidentales han sufrido recientemente el trauma de la banda Baader-Meinhof, y el domingo votaron masiva y cívicamente; la democracia italiana ha resistido auténticas oleadas terroristas y los británicos soportan el cáncer irlandés sin renunciar a sus instituciones. ¿Vamos a aceptar los españoles la postración en un estado permanente de subdesarrollo político? La democracia es una larga batalla, primero para alcanzarla y luego para conservarla. Incumben responsabilidades a Gobierno y oposición. Tiene el Gobierno —que ayer ofreció una muestra de madurez al no declarar el estado de excepción— que emprender una acción rápida y audaz para salir de una situación de estancamiento; la coyuntura actual es la más peligrosa de todas. Y tiene la oposición —si quiere adquirir credibilidad para gobernar— que asumir una parte de la responsabilidad, que le corresponde, en mantener el orden público.